DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR

De acuerdo con el artículo 1º de nuestra Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta concepción del Estado de derecho se asienta en el respeto a la separación de los poderes del Estado, en el imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular, en la sujeción de la Administración al principio de legalidad y al control judicial, y en la garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas mediante una justicia que se administra por jueces y magistrados inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley e integrantes de un poder judicial independiente.

En una sociedad democrática avanzada, la organización política debe promover las condiciones para que el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos y de toda la sociedad sean reales y efectivos, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Todas las políticas públicas tienen que encaminarse al cumplimiento de estos objetivos constitucionales, siguiendo procesos de transformación de los servicios públicos y de sus instituciones, para afrontar con eficacia y prontitud las demandas de la sociedad española en cada momento.

De igual modo, la justicia española tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI y responder a una demanda social, profesional y política unánime para que pueda cumplir con solvencia el papel que le atribuye nuestra Constitución: valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, derecho fundamental, poder del Estado y servicio público esencial para los ciudadanos; sin olvidar su papel en el desarrollo económico de un país.

En términos comparativos con la gestión de la justicia de otros países europeos se observa que, tanto en inversión como en recursos humanos, España se encuentra en niveles homologables, según los informes bienales de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, tanto a los países de nuestro entorno. Aunque hay que avanzar en dotar al sistema judicial de más recursos, más inversión y más profesionales, se deben asignar tanto los recursos ya disponibles como los nuevos de forma más eficiente, encaminados a la “regulación inteligente”, no se trata de regular más sino de hacerlo de manera más inteligente.

Los principios básicos en los que han de cimentarse la búsqueda de la eficiencia y la calidad de la actual Administración de Justicia, pasan por la consideración de ésta como un “Servicio Público” y ello no podrá lograrse hasta que la Justicia se perciba como algo propio, cercana y pronta, que acabe con las largas esperas, las trabas al acceso o utilización del servicio, la incomprensibilidad de las actuaciones, el desconocimiento de los servicios que se ofrecen y la falta de eficacia de algunas decisiones. Un servicio público de calidad con legitimidad social que ofrezca a la ciudadanía confianza y credibilidad y al mismo tiempo eficiente para producir respuestas eficaces y efectivas. Para que los derechos y libertades de la ciudadanía resulten protegidos y garantizados es imprescindible mejorar la calidad del servicio público de justicia. La calidad del servicio público se propone a través de la consecución de los siguientes hitos: Profesionalización de la Justicia que comprende la carrera profesional y la actualización de los estatutos profesionales, el turno de oficio y el fortalecimiento de todas las profesiones jurídicas; Mejora interna Integrando las mejoras en las unidades ejecutivas, fortaleciendo su estructura y adaptándola a las nuevas necesidades; y Modelo organizativo que supondrá la implantación programada de los Tribunales de Instancia, la evolución y desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal y la optimización de la ejecución.

Esta mejora de la calidad del servicio público de Justicia y la protección y garantía de los derechos y libertades conllevan la sostenibilidad y la cohesión social y territorial del sistema. Para conseguirlo se pretende alcanzar estos tres objetivos: Accesibilidad a la Justicia con el fin de asegurar a cada persona el acceso a la Justicia mediante una modernización del lenguaje jurídico y la accesibilidad digital; Llevar a cabo una Política de participación territorial capaz de alinear el sistema territorial en una misma dirección respetando las competencias de cada administración, y reforzamiento de la Seguridad jurídica que garantice la cohesión de las distintas herramientas (Registro Civil, ORGA, Registros de Fe Pública).

Otro principio básico será la transformación de esta administración en una administración pública moderna y avanzada para lo que se hace necesario modernizar las instituciones, además de transformar la política pública de Justicia. Es imprescindible un cambio de estructuras que sean el soporte de tales objetivos.

Será la Secretaría General para la Innovación y el Servicio Público de Justicia, la que afronte el reto de procurar la innovación y la calidad que, al servicio a la ciudadanía, sea el apoyo de las sentencias de nuestros tribunales. Una auténtica actividad de calidad, de deontología profesional con mejor y más efectiva regulación y supervisión del servicio. Se van a emplear todos los recursos necesarios para aumentar la calidad de los servicios, promoviendo y desarrollando organismos, criterios y procedimientos que coloquen al

ciudadano en el centro, como usuario de la Justicia y, por extensión, implantando las buenas prácticas propias de las mejores Administraciones Públicas.

A través de la nueva Dirección General para el Servicio Público de Justicia, se liderarán las estrategias adecuadas para la superación de las ineficiencias organizativas y el establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación, capaces de proporcionar una mayor calidad en el servicio y satisfacer las demandas de los y las usuarias.

La Dirección General de Transformación Digital será la encargada de crear economías de escala y evitar el despilfarro de recursos públicos que produce la duplicidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones digitales para la Justicia. La transformación digital de la Justicia, una de las prioridades del Ministerio de Justicia, en esta legislatura, se articula en torno a tres ejes fundamentales: el marco normativo, las herramientas de cooperación y las herramientas tecnológicas. El marco legal debe permitir esta transformación digital y crear las condiciones de colaboración formal entre los distintos niveles de la administración de Justicia, así como tener unas herramientas tecnológicas que permitan hacerla efectiva en todo el territorio.

El desarrollo del proyecto contempla servicios digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos, tales como el expediente Judicial Electrónico, la intermediación y fe pública digitales y el trabajo en la modalidad no presencial, que unidos y sumados a la cita previa, orientarán de manera decidida los proyectos de mejora de la atención ciudadana en los trámites relativos al servicio público de la Justicia. Además, se busca mayor eficacia y eficiencia con la interoperabilidad de las infraestructuras de Justicia.

Para todo ello, se ejercerá la misión de mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, garantizando la interconexión de las unidades judiciales de todo el Estado, que propicien el acceso inmediato a los datos de todos los servicios judiciales, simplificando su trabajo y recortando los tiempos de tramitación de los expedientes.

Otro aspecto importante es el acercamiento de la administración de justicia a la ciudadanía mediante las posibilidades que la tecnología ofrece, con el fin de dotarla de mecanismos de acceso digital a los servicios de la Justicia, sencillos y transparentes, incluyendo herramientas de ayuda y consulta en línea y evitando desplazamientos innecesarios a las dependencias judiciales.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública va a ampliar sus funciones: respecto a la Seguridad Jurídica preventiva, que es esencial para la sostenibilidad social, el crecimiento económico y la promoción de las inversiones y,

también, respecto al efecto social estructural de la Fe Pública, la que da confianza sobre hechos legales ciertos, que afectan a los derechos y libertades de las personas.

Se potenciará igualmente la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos provenientes de delitos y la ejecución de sentencias con el fin de obtener nuevos recursos económicos para financiar políticas públicas de Justicia, tales como los programas de prevención de toxicomanías, los programas acometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, así como actuaciones en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024.

La Abogacía General del Estado, por su parte, continúa siendo una pieza clave del modelo de justicia que se pretende.

Estas estructuras se establecen con la finalidad de lograr ese gran objetivo de conseguir una Justicia como auténtico y mejor servicio público que se harán constatables en el desarrollo del **PLAN JUSTICIA 2030**, cuyos objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, desarrollándose así el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas.

Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, en este presupuesto 2021 se establece un incremento de plazas de jueces y fiscales medida necesaria para lograr varios objetivos: estabilización numérica de la Oferta de Empleo Público para jueces y fiscales y terminar con la escasa oferta de los últimos años y reducir la interinidad; dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, consensuada con el Consejo General del Poder Judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo.

La materialización de este Plan se llevará a cabo con el desarrollo de tres ejes temáticos: el acceso a la justicia y consolidación de garantías y derechos, la promoción de la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia y en tercer lugar la transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial.

El primer eje de actuación será el denominado de **Consolidación de garantías y derechos**: en un Estado de Derecho podemos decir que existe una verdadera Justicia, si todos y cada uno de los ciudadanos pueden acceder a ella, que se haga realidad recibir ese servicio en tiempo y forma, y que además pueda comprenderla. Para ello, se avanzará en el importante objetivo de generar CONFIANZA en la ciudadanía, lo que resulta imprescindible para su transformación en el servicio público de calidad. Para ello, en

colaboración con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado se instará a los operadores jurídicos para que se realicen resoluciones comprensibles y tramites de procedimientos más accesibles a los ciudadanos.

De igual modo con la finalidad de garantizar los derechos y garantías públicas se procederá a la presentación de la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa en la que se recogerán los principios y reglas básicas, para el ejercicio del derecho de defensa en el proceso, desde la perspectiva del ciudadano y su defensor. Para ello se ha creado una comisión de expertos para la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa, adscrita al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia, que deberá abordar la creación de una norma que integrará las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, un pilar esencial en la configuración de nuestro modelo de Justicia.

Otra medida a llevar a cabo será la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias para que con sistemas paralelos y complementarios a la jurisdicción pueda ofrecerse vías de resolución de diferencias y, a su vez, se disminuya la litigiosidad en los tribunales.

En la misma línea de modernización de la justicia se proyecta una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de actualizar la regulación penal adaptada a los principios constitucionales, otorgando al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, teniendo en cuenta la experiencia de los juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

En un entorno de igualdad social se continuará fortaleciendo la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo en marcha, dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses que actúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, así como una revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.

Conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, se continuará trabajando en el anteproyecto de una Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia en la que se establecerán las medidas necesarias para afrontar los delitos derivados de la violencia contra menores y adolescentes.

Dentro de los contenidos que conforman este eje se incluye el propósito de revertir los Fondos procedentes de delito recabados por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos sobre la sociedad civil, adoptando las medidas oportunas para que puedan beneficiarse de dichos fondos las organizaciones no gubernamentales cuya labor

se desarrolle en materia de asistencia a víctimas del delito, para lo que se pondrá en marcha un programa de subvenciones que permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo sustraído por actividades criminales.

Por otra parte, se potenciará la Promoción de la Eficiencia Operativa del Servicio Público de la Justicia, que se centra en la continuación de proyectos de modernización iniciados con anterioridad y que serán rehabilitados y reforzados: la implantación de forma completa y definitiva del proyecto de oficina judicial, la consolidación de un proyecto de expediente judicial digital seguro y accesible y, por último, la integración de las plataformas de gestión procesal, para preservar la eficacia del sistema y la integración territorial.

El desarrollo y puesta en marcha de los Tribunales de Instancia y la incorporación del mecanismo “sentencia testigo” en el ámbito civil y mercantil, como sistemas de protección básica y fundamental contra posibles abusos, permitirán potenciar soluciones extrajudiciales para la resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa, haciendo posible la extensión de los efectos de las sentencias dictadas por los Tribunales, más allá de las personas reclamantes.

Con la finalidad de garantizar el acceso a la Justicia en iguales condiciones en cualquier parte del territorio, se define un último objetivo: la Transformación digital, citada con anterioridad, con el fin de incrementar la cohesión y coordinación territorial. En este sentido, se recuperará la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia con el fin de abordar con los representantes de justicia de los diferentes territorios los grandes retos, como el de la agrupación de partidos judiciales o la interoperabilidad de los sistemas informáticos, que con mejor organización y coordinación competencial lograrán el objetivo estrella de conseguir mayor accesibilidad y superar la dispersión tecnológica.

Durante los próximos ejercicios, se realizará un importante impulso de Transformación Digital de la Justicia orientado a la consecución de reformas estructurales, que se financiarán en gran parte con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Entre los principales objetivos se encuentran la inteligencia artificial, la justicia orientada al dato, la intermediación digital y fe pública digital, los servicios digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos, y el impulso del teletrabajo.

La Política Justicia entendida como un auténtico servicio público basado en la calidad, accesible, ágil, entendible y sin dilaciones, ofrecido por todos los agentes que intervienen en ella, propiciará una atención al ciudadano tal como nuestro derecho constitucional exige.